HISTORIA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA DEL SIGLO XX

Página/12



39

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA DURANTE EL PROCESO MILITAR



Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz (de perfil). El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha una profunda reestructuración económico-social.

Staff

Director de la colección: Alfredo Zaiat

Director académico: Mario Rapoport
Coordinador: Ricardo Vicente
Colaboradores:
Andrés Musacchio
Eduardo Madrid
Hernán Braude
Agustín Crivelli
Martín Fiszbein
Pablo López
María Cecilia Míguez
Florencia Médici
Leandro Morgenfeld
Pablo Moldovan
Asistente de dirección: Natalia Aruguete

Director general: Hugo Soriani
Rumbo de diseño: Alejandro Ros
Diagramación: Juan Carlos Aguirre
Asistente de fotografía: Omar Chejolán
Coordinación general: Víctor Vigo

E-mail: *historiaeconomica@pagina12.com.ar*

Historia de la economía argentina del siglo XX
Mario Daniel Rapoport
1a. ed. - Buenos Aires: La Página, 2007.
16 p.; 28x20 cm.
ISBN 978-987-503-451-8
1. Investigación Periodística.
CDD 070.43
Fecha de catalogación: 03/08/2007



Discurso de Videla en ACDE, una de las entidades empresarias que brindaron el apoyo más enfático a la política económica y represiva de la dictadura.

1 Nuevo patrón *de acumulación*

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha una de las reestructuraciones económico-sociales más significativas de la historia argentina. La dictadura militar significó el tránsito desde una sociedad industrial a otra basada en el predominio de las finanzas. El nuevo patrón de acumulación convalidó la valorización financiera de una parte del excedente apropiado por el capital oligopólico. Ese proceso se consolidó a través de la adquisición de diversos activos financieros en el mercado interno e internacional, en un momento en el que las tasas de interés superaban la rentabilidad de las actividades productivas. El régimen financiero implementado en 1977 reafirmó esa dinámica y el departamento de finanzas de las compañías pasó a jugar un rol mucho más importante que el dedicado a la producción. Se instauró lo que se conocería como el modelo "rentístico-financiero".

El grueso de la crisis recayó sobre las empresas más pequeñas y sobre algunas grandes vinculadas con el anterior patrón de acumulación. Mientras, ciertas fracciones concentradas del empresariado pudieron posicionarse exitosamente ante el nuevo esquema. Un conjunto acotado de grupos económicos locales, conglomerados extranjeros y algunas transnacionales, lejos de sentir el impacto de la crisis y la reestructuración del aparato productivo, accedieron a una posición de privilegio como resultado de una serie de factores. En primer lugar, mediante una estrategia de integración y diversificación productiva estrecharon lazos con el sector financiero, que se encontraba en pleno proceso de expansión. En segundo término, se ubicaron en una situación muy favorable por la transición desde una estrategia de valorización productiva con base industrial y de realización en el mercado interno hacia otra centrada en torno de la valorización financiera del excedente, con una fuerte orientación hacia el sector externo. Finalmente, una de las cuestiones centrales que determinó la creciente consolidación de los capitales diversificados fue la capacidad de articular una relación estrecha con el Estado. Durante la gestión de Martínez de Hoz los subsidios a las inversiones productivas privadas y el carácter asimétrico de la apertura comercial fueron los principales aspectos de ese impacto diferencial.

Si bien la mayoría del monto total de las inversiones realizadas durante el período fue subsidiada por el Estado a través de los regímenes de promoción industrial, éstas se encontraron concentradas en un número reducido de empresas. De hecho, los 38 mayores proyectos de inversión (9,8 por ciento del total) representaron el 82,3 por ciento (3937 millones de dólares) de la inversión global. Entre los principales beneficiados se encontraban grandes

grupos económicos nacionales y extranjeros, como Celulosa Argentina, Acindar (Martínez de Hoz había sido su presidente), Alpargatas, Bridas, Perez Companc, Garovaglio y Zorraquín y Atanor, por un lado, e Indupa y Duperial por el otro.

Este apoyo estatal a esos conglomerados contrastó fuertemente con los efectos de la política económica sobre el resto del entramado productivo. El caso paradigmático del favor del Estado hacia esos grupos fue la socialización del endeudamiento externo privado a través del seguro de cambio y la posterior estatización de deudas privadas. Ese endeudamiento se concentró en un reducido número de empresas: el 34,5 por ciento de la deuda privada total correspondía a 30 grupos económicos locales.

La reducción arancelaria iniciada en 1976, y profundizada en 1979, no avanzó sobre algunos sectores que mantuvieron el privilegio de una competencia limitada o nula. Los grupos que conservaron ciertos niveles de protección pudieron seguir operando de manera oligopólica, fijando precios e incrementando sus márgenes de ganancia, en marcado contraste con el resto de los sectores, que fueron fuertemente disciplinados por la apertura y la tablita cambiaria. Los capitales nacionales y extranjeros, con una inserción diversificada en su estructura económica, incrementaron su participación tanto en cantidad de empresas como de ventas dentro de la cúpula económica, constituida por las 200 firmas de mayor facturación.

Sin embargo, la posibilidad de llevar adelante una estrategia de integración y diversificación productiva dependía de una serie de factores, siendo la dimensión financiera determinante. La posibilidad de acceder al crédito externo, para lo que era indispensable tener una fuerte presencia en el sector de las finanzas y una estrecha vinculación con el Estado, otorgó una ventaja doble a los grupos económicos privilegiados. En primer lugar, les posibilitó superar las restricciones financieras de corto y mediano plazo obteniendo préstamos a bajas tasas de interés, en un contexto recesivo con la posibilidad de autofinanciamiento restringida. Además, el acceso al crédito externo brindaba la alternativa de aprovechar financieramente la diferencia entre las tasas de interés internacionales, que llegaban incluso a ser negativas, y las elevadas tasas internas, disparadas en una espiral especulativa luego de la Reforma Financiera de 1977.

2 La redistribución *regresiva de los ingresos*



Conferencia de Martínez de Hoz. El proceso militar alteró el patrón de acumulación al pasar de una economía industrial a una de predominio de las finanzas.

La política económica de la dictadura modificó drásticamente la relación entre capitalistas y trabajadores. Los sectores dominantes, bajo la conducción de la oligarquía local, establecieron un profundo replanteo de las relaciones entre el capital y el trabajo. Aunque esta alteración de la pauta distributiva se implementó a partir de las tradicionales políticas de estabilización, su peculiaridad radicó en la profundidad que adquirió la transferencia de ingresos desde los asalariados hacia la oligarquía pampeana, asentada sobre la producción y la exportación de bienes agropecuarios.

El "sinceramiento" de precios condujo a una redistribución del ingreso desde los salarios hacia los beneficios empresarios. En 1976, con congelamiento y control, el salario real bajó un 37 por ciento respecto de los valores vigentes en 1974-1975, situándose en niveles apenas superiores a los de 1945. Se redujo, entonces, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional desde el 45 por ciento en 1974 al 27 por ciento en 1983. En tanto, en la distribución personal de los ingresos, los sectores ubicados en la escala más alta registraron un incremento en su participación porcentual del 28,0 por ciento


En 1976 se congelaron los salarios, lo que implicó una caída en términos reales del 37 por ciento en relación con los dos años anteriores.

en 1976 al 35,1 por ciento en 1981, mientras que los ingresos más bajos descendieron del 12,1 por ciento en 1976 al 10,5 por ciento en 1981.

La reestructuración económica tuvo un marcado impacto en el sector manufacturero, con repercusiones notorias sobre los trabajadores. Entre 1976 y 1983 el Producto Bruto del sector cayó cerca de un 20 por ciento y la incidencia de la actividad industrial en la economía se redujo de 28 a 22 por ciento en el mismo período. Con la valorización financiera como núcleo central del proceso económico, el salario dejó de ser un factor clave para asegurar el nivel de demanda, pasando a ser un costo de producción que debía ser reducido. Además, se fueron perdiendo derechos laborales adquiridos a lo largo de muchas décadas.

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios afectó el consumo del conjunto de la población trabajadora. Los gastos básicos se incrementaron significativamente en términos relativos, al mismo tiempo que se produjo un notable retroceso del consumo de bienes durables por parte de los trabajadores.

Entre 1976 y 1983 se acentuó la tendencia negativa en la evolución del gasto social. El gobierno militar procuró transferir al sector privado las prestaciones sociales de los asalariados, reservando el sector público para la asistencia de los estratos en situación crítica. Se estableció el arancelamiento de los hospitales públicos, exceptuando a quienes pudieran justificar su condición de pobreza. Al mismo tiempo se concretó la transferencia de escuelas y hospitales nacionales hacia las jurisdicciones locales. El gasto público social por habitante disminuyó cerca de un 14 por ciento entre 1977 y 1982, siendo los más afectados aquellos destinados a salud y vivienda. El deterioro de los servicios públicos sociales determinó que los sectores de menores ingresos fueran los más perjudicados.

La liberación del precio de los alquileres constituyó otra contribución al incremento de la regresividad en la distribución del ingreso. Luego de 30 años de control estatal fue librado a los vaivenes del mercado, incluyendo un sistema de indexaciones que operó como una trampa para los locatarios. La consecuencia inmediata fue el aumento en los valores de los alquileres y la multiplicación de los desalojos. Al mismo tiempo se fijó un tope máximo de ingresos para el acceso a la propiedad de viviendas construidas por el Estado.

> En la distribución personal de los ingresos, los sectores de la escala más alta registraron un incremento en su participación porcentual del 28,0 por ciento en 1976 al 35,1 en 1981.

Si bien el principal factor que generó la reversión de la distribución del ingreso fue la reducción del salario real, la desocupación y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores agudizaron ese proceso. Se registró, entonces, un fuerte aumento de los sectores de la población en condiciones de pobreza crítica, pasando del 3,2 por ciento en 1974 al 28,0 por ciento en 1982.





Autopistas Urbanas (AUSA) obtuvo avales del Tesoro para su deuda, que luego tuvo que afrontar el Estado.

EL ENDEUDAMIENTO PRIVADO CON AVALES DEL ESTADO

El siguiente texto fue extraído del libro de Alejandro Olmos *Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron*. Este párrafo es representativo de la vinculación entre el endeudamiento externo y el crecimiento de determinados grupos económicos.

"Importantes operaciones de préstamo externo fueron 'contraídas' por empresas privadas de reconocida solvencia económica como Acindar, Papel Prensa, Induclor, etc. Con la garantía del Estado (Secretaría de Hacienda, Tesoro Nacional). Otras empresas como AUSA (Autopistas Urbanas), Interama y Covimet constituyeron emprendimientos para obras específicas y que tomaron la forma de sociedades con el concurso de importantes empresarios.

No obstante la solvencia de las empresas mencionadas, éstas no atendieron sus obligaciones de crédito externo al vencimiento de las mismas, lo que obligó al Estado –por la garantía constituida– a afrontar los compromisos de las empresas privadas. Estas, a su vez, debían reembolsar al Estado los pagos efectuados por éste. Pero ello no ocurrió y el Estado debió negociar con las empresas la recuperación de los fondos públicos que se afectaron para cubrir las obligaciones de esas empresas. En algunos casos –pocos– se iniciaron juicios tendientes a recuperar las sumas pagadas por el Estado (...).

Los peritos judiciales (ad hoc) Dres. Alberto Tandurella y Sbatino Forino produjeron, con relación a los avales, un dictamen elevado al Juez que entiende en el juicio de la deuda. En distintas partes de dicho dictamen, los peritos informan que:

1. Conforme al cuestionario fijado por S. S. en su resolución del 14 de febrero de 1983 (punto 1), hemos determinado que, con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron deudas de varias empresas privadas, cuyo detalle por deudor, monto y fecha del incumplimiento consta en las planillas que acompañamos, producidas por la Contaduría General de la Nación y por la Superintendencia del Tesoro (ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía) en fechas 22–6–83, 29–6–83 y 27–7–83 (Anexos 1, 2 y 3).

2. También hemos comprobado que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos pertinentes, iniciaron actuaciones tendientes al recupero de las sumas oportunamente pagadas por el Estado, ni se acogieron al beneficio de excusión (...).

3. Acindar gestionó varios avales desde el año 1975, que tramitaron ante el Ministerio de Economía y fueron otorgados por aplicación de regímenes promocionales para la actividad que desarrolla (siderurgia), sin que diera cumplimiento a sus obligaciones como deudora en oportunidad de vencimiento de sus obligaciones (...).

4. AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) obtuvo, según consta en el Memorando de la Superintendencia del Tesoro del 27–7–83 (Anexo 15):

a. Siete avales por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de U$S 893.600.000 (Ochocientos noventa y tres mil seiscientos millones de dólares estadounidenses);

b. Tres avales con intervención de dos bancos británicos y uno japonés, por un monto de U$S 205.000.000 (Doscientos cinco millones de dólares estadounidenses) y yenes 15.000.000.000 (Quince mil millones de yenes japoneses), respectivamente.

5. Covimet obtuvo dos avales por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto de U$S 200.000.000 (Doscientos millones de dólares estadounidenses), según consta en el citado Memorando de la Superintendencia del Tesoro.

6. Parques Interama S. A., también según el citado Memorando, obtuvo:

a. Tres avales por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto de U$S 102.000.000 (Ciento dos millones de dólares estadounidenses).

b. Un aval por intermedio del Banco de la Nación Argentina por U$S 5.000.000 (Cinco millones de dólares estadounidenses)."

Olmos, Alejandro, Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron, *Buenos Aires, Ediciones Continente, 2004, págs. 134 y 135.*





Gregorio Perez Companc. Líder de uno de los grupos económicos que más se diversificaron y expandieron durante el gobierno militar.

LA EXPANSIÓN DE PEREZ COMPANC

Uno de los grupos económicos que más crecieron durante la dictadura militar fue el dirigido por Gregorio "Goyo" Perez Companc, que en el año 2006, según la revista estadounidense *Forbes*, era el hombre más rico de la Argentina. Una parte importante de esa fortuna la hizo en el período 1976–1983.

Actividad económica	Nuevas empresas instaladas			
	Denominación	Año	Actividad	Participación en el capital
Pesca	Pesquera Santa Margarita SA Pesquera San Carlos SA	1977 1977	Pesca para exportación Pesca para exportación	51,0 51,0
Minería	Complejo Cerro Castillo SA Sierra Grande SA	1979	Producción de oro, plata, zinc Fluorita, baritina	50,0 51,0
Petróleo	Pecom do Brasil Cañadón Piedras SA	1981 1981	Petrolera Explotación	100,0 Minoría
Industria -alimentos -petroquímica -comunicaciones	 Laponia SA Punta Loyola SA PecomNEC SA	 1981 1980	 Helados Fertilizantes Equipos de comunicac.	 45,0 Mayoría 51,0
Construcción	Nuclear SA Falda del Carmen SA Pecom Nuclear SA Alto Palermo SA Interamerican Asociados SA	1977 1982 1981 1981 1981	Instalación de plantas nucleares Obras públicas Instalación de plantas nucleares Construcción inmobiliaria Construcción	s/i Minoría 100,0 s/i s/i
Financiera	Citicorp y Río Banca de Inv.	1980	Banco de Inversión	Minoría

Fuente: Azpiazu, D., Basualdo, E. M, Khavisse, M., *El nuevo poder económico en la Argentina de los años '80*, Bs. As., Ed. Legasa, 1989, pág. 145.



La Fundación de Investigaciones *Económicas Latinoamericanas (FIEL)*

FIEL fue fundada en 1964 por iniciativa de las organizaciones que representaban la capa superior de la clase empresarial dominante: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Encarnaba los intereses de los sectores más concentrados del establishment argentino y del capital extranjero. Más de la mitad de las empresas patrocinadoras de FIEL figuraban entre las 100 primeras en el ranking de ventas y el 50 por ciento era extranjero. En 1967 se destaca la participación de Acindar, Ducilo, Banco Galicia, Shell, Esso, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Pirelli, Duperial, Alpargatas, Astra y Banco de Boston.

La institución se vio beneficiada por la amplia colaboración de varios de sus miembros en puestos claves de la administración del Estado. Antes de la creación de FIEL, algunos de los que serían sus integrantes ya habían sido ministros de Economía y adscriptos al liberalismo económico: Adalbert Krieger Vasena, Roberto Alemann, Jorge Wehbe, Eustaquio Méndez Delfino y José Alfredo Martínez de Hoz.

De la propia Fundación provinieron los ministros de Economía del gobierno de Onganía: nuevamente Krieger Vasena y José María Dagnino Pastore. Lo mismo sucedió con los titulares de dicha cartera durante la última dictadura militar. Si bien esa participación se redujo con las democracias, algunas figuras de la institución continuaron en la función pública con un rol significativo. Por ejemplo, Miguel Roig, con Menem, en 1989, Néstor Rapanelli, que lo sucedió y, más tarde, en el gobierno de la Alianza, Ricardo López Murphy. También fue destacada la participación de integrantes de FIEL en el directorio del Banco Central.

El primer presidente de la Fundación fue Eduardo Luis García, por entonces el máximo dirigente de la Cámara Argentina de Comercio en cuya sede comenzó a funcionar esta institución. Su consejo directivo estaba integrado por diez personas que eran los presidentes de las corporaciones fundadoras. Como director de investigaciones fue designado un graduado de la academia estadounidense, Dagnino Pastore. La asesoría general quedó a cargo de Juan Alemann, futuro secretario de Hacienda de la dictadura de Videla.

> FIEL vivió sus años de gloria cuando los gobiernos militares y ministros de Economía ligados a la entidad instauraron el dominio de las doctrinas ortodoxas.

La Fundación Ford se comprometió a financiar los primeros pasos de FIEL, aunque luego los fondos extranjeros se sustituyeron por locales. Las becas Ford permitieron que varios economistas locales pudieran obtener títulos académicos en los Estados Unidos, como Juan Carlos de Pablo. Asimismo, la institución incorporó a un economista cubano anticastrista, Armando Ribas, con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, y a Norberto Belozercovsky, con estudios en Chicago.

Como forma de conseguir financiamiento para las investigaciones se comenzaron a realizar tareas de consultoría y análisis de coyuntura, dando lugar a distintas publicaciones: *Indicadores de Coyuntura, Reseña de la Industria, Reseña de la Actividad Económica, Indicadores de Actividad y Precios.* Al mismo tiempo, se fue convirtiendo en la consultora de las empresas privadas más grandes del país.



Eduardo Luis García, primer presidente de FIEL, líder de la Cámara Argentina de Comercio.



FIEL fue el centro de divulgación de las ideas neoliberales y aportante de funcionarios y ministros a diferentes gobiernos.

Si bien desde un comienzo entre sus integrantes predominó la inclinación por empresas y figuras del establishment tradicional, pronto se fueron agregando a sus filas representantes de nuevos grupos económicos en ascenso. También estuvieron presentes militares en la Fundación, ocupando cargos en los consejos-dirigentes o consultivos de la institución, como el general Alcides López Aufranc, presidente de Acindar.

La incorporación de investigadores estables fue creciente, sumando quince en 1967. Sus actividades y ejes de análisis fueron extendiéndose y hacia 1971 eran aproximadamente treinta, la mayoría con estudios en el exterior financiados por convenios de FIEL con otras instituciones, entre los que se encontraban Juan Alemann, Oscar Altimir, Eustaquio Méndez Delfino, Pedro Pou, Lorenzo Sigaut y Adolfo Sturzenegger.

A partir de 1976, "FIEL viviría sus años de gloria, cuando los sucesivos gobiernos militares y ministros de Economía ligados a la entidad instauraron, a sangre y fuego, el dominio casi hegemónico de las doctrinas ortodoxas dentro y fuera del ámbito empresarial", destaca Hernán Ramírez en su libro *Corporaciones en el poder* (Bs. As., Lenguaje Claro, 2007, pág. 201). El predominio del sector financiero en la economía hizo que aumentaran las entidades bancarias entre los patrocinadores de la Fundación, lo que lentamente fue gestando contradicciones con los representantes del empresariado industrial, que desembocaría en 1991 con el alejamiento de la UIA y la conformación por parte de esta última de un instituto propio de investigaciones.

En su etapa de esplendor FIEL fue abandonando las preocupaciones por temas de microeconomía relacionados con la subsistencia y crecimiento de las empresas, para dedicarse a un ataque frontal a la intervención del Estado como regulador de la economía, defendiendo un liberalismo ortodoxo cuyo blanco eran las políticas proteccionistas. De ese modo se fueron elaborando modelos y recetas económicos que se aplicaron plenamente en los años noventa.

A partir de 1986, crecieron las publicaciones que describían el supuesto fracaso del estatismo y de las regulaciones, y la Fundación sería un actor central en los debates en que se fueron imponiendo las reformas neoliberales. Los economistas de FIEL estaban en consonancia con las versiones más ortodoxas emanadas de fuentes estadounidenses, gracias a su tránsito por instituciones educativas de ese país. Sus formulaciones teóricas apuntaban a garantizar los intereses de las grandes empresas asociadas y a justificar las medidas propuestas para beneficiarlas. Existió así una convergencia de intereses materiales concretos, teoría económica y prácticas políticas.



Acindar fue uno de los grupos económicos beneficiados por la política económica de Martínez de Hoz, quien era su presidente antes de asumir como ministro.

3 La centralización del capital y *la valorización financiera*

El nuevo patrón de acumulación instaurado en 1976 produjo modificaciones estructurales que se tradujeron en un predominio de la centralización del capital a partir de la valorización financiera. En ese contexto, la unidad económica pasó a ser el grupo o conglomerado empresarial. Es decir, capitales propietarios de múltiples firmas en varias actividades económicas, que responden a estrategias de integración horizontal o vertical, o de diversificación de actividades.

Una de las primeras medidas del gobierno militar fue liberalizar el tratamiento hacia la inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, no se obtuvo el efecto buscado. No sólo los flujos de IED fueron relativamente modestos durante ese período, sino que entre 1976 y 1981 se retiraron o cerraron temporariamente sus actividades las multinacionales General Motors, Citroën, Olivetti, John Deere y Massey Ferguson, al tiempo que pasaron a manos nacionales dos firmas extranjeras de gran tamaño como Sudamtex y Tamet.

En contra de las expectativas del equipo económico, la inversión se mantuvo en niveles bajos durante ese período. El cierre de fábricas, incluso grandes, fue un hecho extendido durante la última dictadura. Entre 1975 y 1982 cerró alrededor del 20 por ciento de los establecimientos fabriles de mayor tamaño. Los movimientos en el segmento de las firmas más grandes fueron tan intensos que de las 100 mayores empresas industriales de 1975, 33 ya no estaban dentro de ese ranking en 1981.

El abandono de la economía sustitutiva de importaciones, en la que el sector industrial constituía el sector más dinámico, impactó de manera diferenciada sobre los diversos actores del mundo empresario. Los pequeños y medianos fueron los más perjudicados, al tiempo que un grupo de grandes compañías salió muy beneficiado. No obstante, dentro de este último segmento también se produjeron rupturas significativas que darían lugar a una nueva configuración del poder económico.

Los capitales oligopólicos nacionales o extranjeros, que disponían de pocos establecimientos, mercados restringidos o poseían bajos niveles de integración vertical u horizontal, fueron perdiendo importancia relativa. Por el contrario, otros grupos aumentaron su poder económico y el control sobre los distintos mercados, incrementando en forma significativa su participación relativa en las ventas totales. De allí en más esos grupos económicos pasarían a detentar una enorme capacidad para condicionar la trayectoria de la economía nacional, no sólo por ser propietarios de muchas de las principales empresas industriales, sino por controlar conglomerados que se desenvolvían en los más variados sectores de la actividad económica.

La caída de la participación de algunas transnacionales en la producción y el valor agregado industrial

se dio vis-à-vis del avance del núcleo de los grupos económicos en ascenso a través de estrategias de consolidación en sus mercados principales y de diversificación hacia otras áreas de negocios. Esos procesos incluyeron inversiones para la creación de nuevas compañías, generalmente apoyadas en subsidios o contratos del Estado, la denominada "patria contratista", así como mediante la compra de establecimientos tradicionales.

Dentro del avance de los grupos económicos locales es posible distinguir dos lógicas diferentes. Por un lado, los procesos de consolidación de grupos económicos ya existentes que habían sustentado su proceso de acumulación previa en el área productiva (como Techint, Bridas, Aluar, Perez Companc, Massuh, Macri, Bunge y Born). Por otro, la aparición de un pequeño número de grupos basados en la actividad financiera (como los nucleados en torno de los bancos Oddone y Los Andes), que se expandieron fundamentalmente a través de la compra de empresas. A diferencia de los primeros, la lógica de estos últimos estuvo totalmente dominada por objetivos de valorización financiera.

Un caso paradigmático de un grupo que combinó actividades financieras con bancos comerciales y se diversificó a las actividades productivas y de servicios fue Perez Companc. Originado en la propiedad de tierras en la Patagonia, en 1947 fundó una empresa naviera. Tres años más tarde se insertó en el negocio de los seguros y luego en las actividades agropecuarias y forestales. A mediados de 1970, el grupo poseía 150.000 hectáreas en la Patagonia, 27.000 en Buenos Aires y Santa Fe y 54.000 en Misiones. Sin embargo, la exploración y extracción de petróleo se convirtieron en su actividad principal. En 1961, el grupo Perez Companc compró el Banco Río de la Plata, que se transformó en uno de los primeros del país. Su expansión más intensa se produjo tras el golpe de 1976, básicamente alrededor de la actividad petrolera y las construcciones y comunicaciones. En el sector financiero absorbió otras entidades: en 1972 adquirió el Banco del Este en el Uruguay, en 1979 incorporó el Banco Delta y el 1983 compró un tercio del Banco Ganadero.

> **Los grupos económicos pasaron a detentar una enorme capacidad para condicionar de la economía nacional por ser propietarios de muchas de las principales empresas industriales.**

La expansión de los grupos económicos locales estuvo en gran medida asociada al aprovechamiento de regímenes promocionales para la inversión con fuertes subsidios, al abastecimiento a entidades o empresas estatales, al ingreso a operaciones de privatización o concesión de actividades antes en manos del Estado e incluso al papel de "protector" por parte del Estado para la creación y/o consolidación de empresas locales en actividades tales como la industria naval, la pesca o el sector nuclear. En otras palabras, la clave del ascenso de ciertos grupos económicos locales no fue el "mercado" sino el control que ejercieron sobre el Estado, que les permitió una acelerada expansión en detrimento de las restantes fracciones del capital.



Amalita Lacroze de Fortabat. Los grandes grupos económicos incrementaron su poder en la economía en el período 1976-1983.

En definitiva, durante la última dictadura militar se produjo una fuerte redistribución del ingreso desde los asalariados hacia los capitalistas a través de, entre otras cosas, la caída del salario real, el deterioro de las condiciones laborales y el incremento en la extensión y la intensidad de la jornada de trabajo. Sin embargo, entre los empresarios hubo también sectores fuertemente perjudicados por la crisis socioeconómica, en general, y la industrial, en particular, sobre todo pequeños y medianos, mientras que otros se beneficiaron con ella. Dentro de las firmas oligopólicas se produjeron rupturas significativas que dieron lugar a una nueva fisonomía del poder económico. Aquellas que controlaban pocas empresas y mercados con escaso grado de diversificación tendieron a perder importancia en el agregado sectorial. Por el contrario, un conjunto reducido de grandes grupos económicos incrementó su poderío económico y el control que ejercía sobre un amplio espectro de mercados. Tales fueron los casos de Acindar, Agea/Clarín, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín, Ledesma, Macri, Perez Companc, Roggio, Soldati, Techint y Werthein.



Daniel Azpiazu

"Hubo una política funcional a los grupos económicos"

POR AGUSTÍN CRIVELLI Y MARÍA CECILIA MÍGUEZ

Daniel Azpiazu es economista e investigador principal del Conicet y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Fue funcionario del Conade y consultor del Indec, de la Secretaría de Industria y de la Cepal. Autor de *La concentración en la industria argentina*, a mediados de los años noventa, y coautor de *El nuevo poder económico en la Argentina*, de los años ochenta, y de *El desarrollo ausente*.

Usted ha estudiado en profundidad el proceso de concentración y centralización de capital durante la última dictadura militar. ¿Cuáles fueron las políticas económicas que lo provocaron?

–Por acción u omisión, el conjunto de las políticas económicas y aun los vaivenes y discontinuidades en su aplicación resultaron absolutamente funcionales a la profundización del proceso de concentración y centralización del capital. Es más, como enseña la teoría, hasta la crisis económica de principios de los ochenta, resultante de la propia política económica, no hizo más que intensificar dicho proceso. La asimétrica apertura económica al exterior, la liberalización de los mercados, la Reforma Financiera, la adopción del enfoque monetario de balanza de pagos, la inacción oficial en materia de políticas activas "promercado", entre otras, individualmente consideradas, podrían no resultar suficientes para explicar la profundización de dicho proceso. No obstante, su convergencia en un escenario de achicamiento del mercado interno devino naturalmente, bajo diversas formas específicas, en un creciente grado de concentración y centralización del capital en la economía argentina.

¿Quiénes resultaron sus principales beneficiarios?

–Los grandes conglomerados de capital nacional y transnacional que, si bien en cuanto a su conformación precedían a la dictadura militar, pasan durante ese período a ejercer un liderazgo absoluto del proceso de acumulación. Ello no es más que una consecuencia de la funcionalidad de las políticas económicas a los intereses de esos grupos económicos. Entre las que se destaca:

◆ La presencia de firmas controladas en el sector financiero, con acceso a tasas diferenciales y aprovechamiento pleno de la valorización financiera de sus capitales en el marco de la Reforma Financiera de 1977.

◆ La agilidad en cuanto a reasignación de sus excedentes en el interior de los propios conglomerados por la amplia diversificación sectorial hacia aquellas firmas controladas que coyunturalmente emergían como las de mayor tasa de retorno.

◆ Las potencialidades diferenciales que les otorgaba el fortalecimiento de las ventajas asociadas a la integración vertical y/u horizontal entre sus firmas controladas.

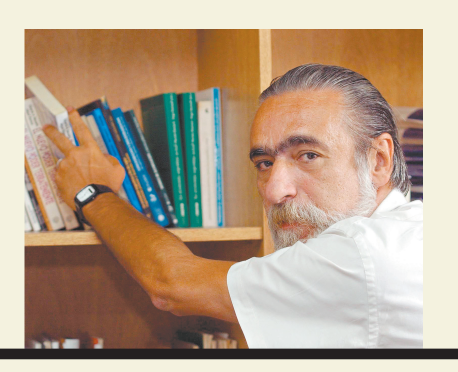
◆ Las relaciones de compraventa con el Estado a través de la provisión de bienes a precios muchas veces por debajo de sus costos, y sobreprecios en las compras del Estado.

Todos esos factores emergen como cuestiones estructurales diferenciales respecto a las restantes fracciones del capital que les permitieron consolidarse, durante la dictadura militar, como el bloque hegemónico del poder económico local.

¿De qué modo se vincula el endeudamiento externo con ese proceso de concentración y centralización?

–Gran parte de ese endeudamiento externo se concentró, precisamente, en los grandes conglomerados –nacionales y extranjeros– locales. Ese proceso tuvo, en el marco de la revalorización cambiaria y la "tablita", su contrapartida en la fuga de capitales. La posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento externo, su valorización financiera local a tasas de interés en moneda fuerte muy por encima de las internacionales, con una suerte de seguro de cambio –la "tablita"–, viabilizó la internalización de una ingente masa de recursos financieros que no hizo más que retroalimentar e intensificar el proceso de concentración y centralización del capital en el país. Es más, ello se potenció a partir de la transferencia de una considerable proporción de su endeudamiento externo al conjunto de la sociedad a partir de la estatización de la deuda externa y la licuación de los pasivos locales de principios de los años ochenta.

Remarca el carácter desindustrializador de las políticas del gobierno militar. ¿A qué obedece dicha orientación de las políticas y cuáles fueron sus consecuencias?



—El PBI industrial generado en 1983 supone una caída del 15 por ciento en relación al correspondiente a 1974, la expulsión de una tercera parte de la mano de obra del sector manufacturero, la reestructuración regresiva del sector con la desaparición de buena parte del entramado sectorial. Esto denota claramente el sesgo desindustrializador de las políticas desplegadas por la dictadura militar. En ese sentido, a diferencia de otras fases históricas previas, no se trató de alterar el patrón de industrialización sustitutiva intentando aprovechar y potenciar la masa crítica acumulada revirtiendo sus limitaciones. Por el contrario, se trató de cuestionar radicalmente su propia existencia y desmantelar las bases de la industrialización sustitutiva. Para ello y, por ello, la tríada agresión–crisis–irreversibilidad encontró en la apertura de la economía, el retraso de la paridad cambiaria, la contracción de la demanda interna –no ajena a la brutal caída de los salarios reales y transferencia de recursos del capital al trabajo– y en la redefinición del papel del Estado, los mecanismos para agredir a una estructura económico-social incompatible con los objetivos de disciplinamiento propuestos por la dictadura militar. En ese escenario, bajo la conjunción de liberalismo económico y terrorismo de Estado, el principal foco de agresión recayó sobre la clase obrera industrial: represión, pérdida de conquistas sociales, supresión de leyes laborales y convenios colectivos, derecho de huelga, y prohibición de actividades sindicales. Y también sobre sus potenciales alianzas con otras fracciones de clase que, en su momento, ponían en cuestión las propias relaciones de producción. En otros términos, pecando de economicismo, la doble función del salario, como componente de los costos de producción pero, también, como parte constitutiva fundamental de la demanda interna, se vio crecientemente acotada a su condición de "costo". Aquí es donde, también, se logró uno de los grandes éxitos de la dictadura militar: establecer un nuevo piso –bien bajo– en torno al cual pasó a quedar establecido el debate sobre el salario real de los trabajadores durante las próximas tres décadas.



Las autopistas de Buenos Aires



Pese a evaluaciones de instituciones de gran prestigio nacional e internacional, la dictadura avanzó en el proyecto de las autopistas.

El escritor Ernesto Sabato cuestionó al intendente brigadier general retirado Osvaldo Cacciatore por la construcción de las autopistas, al concluir la primera parte del plan de obras, en 1980. El autor de *Sobre héroes y tumbas* y *El túnel*, entre otros obras, afirmó:

"Prefiero el destino de un solo niño al cemento armado 'per cápita'. La condena que en su hora hicieron el Centro Argentino de Ingenieros y la Sociedad Central de Arquitectos, los dos organismos más específicos que sobre este asunto tiene la Nación, la condena expresada por famosos arquitectos y urbanistas, tanto del país como del extranjero que nos visitaron, nada de eso se escuchó; todo fue realizado a veces de la manera más soberbia. ¿Quiénes promueven más la subversión? El noble Saint-Exupéry (su libro *El Principito* acababa de ser prohibido como texto de lectura en las escuelas) o los generales culpables de los negociados más escandalosos de todos los tiempos de nuestro país. Por la mitad de esas maniobras o tal vez por la décima parte bajo un gobierno democrático se hubiese dicho que eso era la prueba de la corrupción típica de la democracia y, naturalmente, hubiera habido un golpe de Estado."

La construcción de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno constituyó un ejemplo muy representati-

vo de la relación entre el Estado y los capitales extranjeros, del aumento de la deuda y de la corrupción.

A contramano de las evaluaciones de instituciones de gran prestigio y de las tendencias mundiales, el intendente Osvaldo Cacciatore dispuso en 1977 la construcción de nueve autopistas urbanas con una extensión de 100 kilómetros aproximadamente, lo que constituía un absurdo respecto de otras ciudades del mundo. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro Argentino de Ingenieros en junio de 1979, Buenos Aires tendría 3,6 veces más autopistas por kilómetro cuadrado que la ciudad de Los Angeles.

El proyecto iba en contra de la tendencia mundial a la revalorización del ferrocarril y de construcción de autopistas perimetrales o de circunvalación. Ese diseño fue cuestionado por el Centro Argentino de Ingenieros, por la Sociedad Central de Arquitectos, la Sociedad Argentina de Planificación y por otras asociaciones y personalidades de prestigio. Como la traza pasaba por el centro de varias manzanas de la ciudad era necesario realizar una cantidad significativa de expropiaciones.

Las nueve autopistas proyectadas requerían aproximadamente de la expropiación de 500 manzanas. Más de 2000 viviendas fueron expropiadas, con el respectivo costo para el Estado. Luego de ese oneroso trámite, Cacciatore y la empresa española de Autopistas Urbanas (AUSA) firmaron el contrato para la ejecución de dos de esas autopistas, las únicas que llegaron a construirse, la 25 de Mayo y la Perito Moreno.

Las condiciones de ese contrato demuestran las características que adoptó esa "inversión". El Estado municipal no sólo se hacía cargo del gasto por expropiaciones, sino que se comprometió a ofrecer una garantía del Estado nacional por 100 millones de dólares para los créditos que AUSA tomara para construir las obras. Para ello, la Municipalidad ofreció como aval los recursos de la coparticipación federal. La empresa concesionaria debía efectuar las demoliciones de los edificios, realizar las dos autopistas y construir locales comerciales y playas de estacionamiento. La concesión era por un período de 25 años a partir de 1980, con la libertad para fijar tarifas de estacionamiento, peaje, servicios y alquileres de locales.

Además, la Municipalidad, con la garantía del Banco Central de la República Argentina, aseguraba en el Pliego de Condiciones la adquisición y transferencia de las divisas extranjeras necesarias contra la entrega de moneda argentina para el pago de intereses, amortización de capital y gastos de créditos financieros contraídos por AUSA para la ejecución de las obras. Como si fuera poco, en diciembre de 1980, el Estado nacional concedió una ampliación de los avales por un monto de 150 millones de dólares, gracias a un crédito obtenido en la banca inglesa.

Una inversión al viejo estilo: las autopistas fueron construidas por una empresa privada pero el Estado nacional fue el que asumió la responsabilidad de los avales y otorgó el crédito. Era previsible que, dados los enormes costos de la construcción y la evolución del parque automotor de la ciudad, las autopistas una vez funcionando no fueron rentables. De hecho, y según los cálculos, lo que la empresa percibiría durante el primer año en concepto de peaje sólo le alcanzaría para cubrir un tercio de los intereses de la deuda, con lo cual la quiebra era inevitable, trasladándose la responsabilidad por la deuda al Estado. La ganancia para AUSA no estaba en el funcionamiento de la autopista, sino en el mecanismo de avales y garantías del Estado. A ese negocio debe agregársele el de la corrupción existente en la contratación de los servicios de consultoría, por parte de una empresa denominada ATEC.



El intendente Osvaldo Cacciatore junto a Videla en un tramo de las obras de la autopista 25 de Mayo-Perito Moreno.



Grupos económicos con mayor endeudamiento externo al 22 de enero de 1985 (en millones de dólares)

Deudor	Monto	Deudor	Monto
Cogasco SA	1384	Banco Tornquist	134
Autopistas urbanas	951	Banco Español	134
Celulosa Arg.	836	SADE	125
Acindar	649	SEVEL	124
Banco Rio	520	Banco de Quilmes	123
Alto Paraná	425	Parque Interama	119
Banco de Italia	388	Cia. De Perforaciones Rio Colorado	119
Banco de Galicia	293	Swift Armour	115
Bridas	238	IBM	109
Alpargatas	228	Banco Sudameris	107
Citibank	213	Banco de Boston	103
C. Nav. Perez Companc	211	Astra Evangelista	103
Dálmine Siderca	186	Mercedes Benz	92
Banco Francés	184	Banco de Credito Rural	92
Papel de Tucumán	176	Deutsche Bank	90
Juan Minetti	173	Ind. Met. Pescarmona	89
Banco Mercantil	167	Banco Roberts	89
Aluar	163	Banco General de Negocios	87
Banco Ganadero	157	Alianza Naciera Argentina	82
Celulosa Puerto Piray	156	Propulsora Siderúrgica	81
Banco Crédito Argentino	153	Ford	80
Banco Comercial del Norte	137	Astilleros Alianza	80
Banco de Londres	135	Massuh	80

Fuente: Sentencia del Juicio a la Deuda Externa (Fallo del Juez Ballesteros), según datos del BCRA, transcripta en Cuadernos de Historia Viva, Año 1, otoño 2001, pp 117118.

Crecimiento del PBI, inflación y tarifas 1976-1983

Año	PBI variación anual en %	Tasa de inflación variación en %	Incremento tarifas transporte público v. anual %
1975	0,9	182,6	177,4
1976	0,2	444,0	532,0
1977	6,0	176,0	134,3
1978	3,9	175,5	207,3
1979	6,8	159,5	130,1
1980	0,7	100,8	161,3
1981	6,2	104,6	118,1
1982	5,2	164,7	141,5
1983	3,1	343,3	357,6

Fuentes: INDEC, CEPAL, Vitelli (1990), Rapoport (2007)

Bibliografía

ALTIMIR, OSCAR, "La dimensión de la pobreza en América Latina", *Cuadernos de la CEPAL* Nº 27, Stgo. de Chile, 1979.
AZPIAZU, DANIEL, BASUALDO, E. M., KHAVISSE, M., *El nuevo poder económico en la Argentina de los años '80,* Buenos Aires, Ed. Legasa, 1989.
BASUALDO, EDUARDO, *Estudios de Historia Económica Argentina-Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, FLACSO/Siglo XXI Editores Argentina, 2006.
HEREDIA, MARIANA, "El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA", en Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
OLMOS, ALEJANDRO, *Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron*, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2004.
PUCCIARELLI, ALFREDO (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
RAMÍREZ, HERNÁN, *Corporaciones en el poder*, Buenos Aires, Lenguaje Claro, 2007.
RAPOPORT, MARIO, *Historia económica, política y social de la Argentina (1880–2003)*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
SCHORR, MARTÍN, *Industria y nación*, Buenos Aires, Edhasa, 2004.
SCHORR, MARTÍN, "La industria argentina entre 1976 y 1989. Cambios estructurales regresivos en una etapa de profundo replanteo del modelo de acumulación local", IDAES, Buenos Aires. s/f.
SCHVARZER, JORGE, "Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período Martínez de Hoz", *Desarrollo Económico*, vol. 23, Nº 91, OctubreDiciembre, Buenos Aires, 1983.
SCHVARZER, JORGE, *La política económica de Martínez de Hoz*, Buenos Aires, Hyspanamérica, 1986.
SCHVARZER, JORGE, *La industria que supimos conseguir*, Buenos Aires, Ed. Cooperativas, 2000.
VÁZQUEZ, ENRIQUE, *PRN. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, Buenos Aires, Eudeba, 1985.

Ilustraciones

(Tapa) Frente de la fábrica Alpargatas, década de 1940. Fuente: Archivo General de la Nación.
(Págs. 610, 611, 616 y 622) Archivo General de la Nación.
(Pág. 613) Blaustein, E., *Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura,* Comisión Municipal de la Vivienda, Buenos Aires, 2001.
(Págs. 614 y 621) Archivo AUSA.
(Págs. 612, 615, 619 y 623) Archivo **Página/12.**
(Pág. 617) Archivo FIEL.
(Págs. 618 y 621) Archivo Télam.